

Hechos del Callejón



UNA PUBLICACIÓN DE:
PNUD, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO
AÑO 3
OCTUBRE DE 2007
ISSN 1794-9408

CON EL AUSPIO DE:



CON LA COLABORACIÓN DE:



▶ NÚMERO 29

▶ **EDITORIAL**

**La hora del poder local:
elecciones de octubre**

p. 19

▶ **PÁGINA HUMANITARIA**

**Impacto del VIH/Sida en
contextos de conflicto**

p. 16

▶ **CÓMO NOS VEN**

**La búsqueda de los
desaparecidos**

p. 13

▶ **BUENAS PRÁCTICAS**

**Tras el retorno, amanece
en El Salado**

p. 20

Claves para reparar a indígenas

© Cortesía Darío Villalón



El conflicto ha socavado las organizaciones de los pueblos indígenas de Colombia. Como su cultura, la reparación a los indígenas, debe ser particular.

La reparación a los indígenas debe tener en cuenta que estas comunidades tienen sus propios conceptos de verdad, justicia y reparación; que el territorio tiene una importancia vital dentro de su cultura y de qué forma han sido afectadas su autonomía, sus autoridades, sus organizaciones sociales, sus relaciones familiares y su relación con la naturaleza. p. 6

El Debate

p. 2

Los ciudadanos y sus agendas para las elecciones de este 28 de octubre

Aún hay tiempo para que los candidatos a las elecciones del próximo 28 de octubre escuchen las demandas de los ciudadanos y las incluyan dentro de sus planes de desarrollo. Éstas son algunas de las preocupaciones sobre las cuales los ciudadanos piden mayor atención.

¿Y al fin qué?

p. 10

Las realidades y el mito sobre la pobreza y el conflicto

Hay dos premisas claras frente al tema de la pobreza y el conflicto; la primera, la pobreza no genera conflicto, ya que éste se encuentra más asociado a la desigualdad y la riqueza. La segunda, el conflicto sí causa pobreza, ya que fractura el capital humano, físico y económico de un país.

Los ciudadanos y sus agendas para las próximas elecciones

Aún hay tiempo para que los candidatos a las elecciones del próximo 28 de octubre escuchen las demandas de los ciudadanos y las incluyan dentro de sus planes de desarrollo. Éstas son algunas de las preocupaciones sobre las cuales los ciudadanos piden mayor atención.

¿Qué les preocupa a los ciudadanos que van a votar en las elecciones del próximo 28 de octubre? ¿Qué les piden a los candidatos que aspiran a ser gobernador, alcalde, concejal o diputado? ¿Cuál es la agenda del votante?

Las personas entrevistadas piden reducir la pobreza, aumentar las oportunidades de empleo, ampliar la cobertura y la calidad de la educación y la salud, combatir la inseguridad y la corrupción, garantizar los derechos fundamentales, atender a poblaciones menos favorecidas y a las víctimas del conflicto. Mientras los votantes entrevistados en la Costa quieren que los candidatos defiendan el interés público, y los de los Santanderes aspiran a tener libertad y tranquilidad,

en Nariño y Cauca les preocupa el desplazamiento y la construcción de proyectos de gran envergadura. Las próximas elecciones son la oportunidad para dar prioridad en las agendas políticas a estas preocupaciones ciudadanas. Las siguientes son algunas de ellas:

Pacífico: megaproyectos, conflicto y desarrollo social

En varios departamentos del Pacífico la población está preocupada por la situación social, la construcción de megaproyectos y las fumigaciones, así como por la necesidad de reconstruir el tejido social e institucional y por el desarrollo de políticas de paz integral.

Fumigaciones y megaproyectos. Las fumigaciones siguen siendo una preocupación para la comunidad por su impacto en la vida, la salud y el medio ambiente. Nariño tiene, según el más reciente informe de Naciones Unidas, la mayor cantidad de cultivos de hoja de coca (15.606 hectáreas). Adicionalmente, según el analista Gregorio Mesa, responsable del Pacífico en la ONG Planeta Paz, también existe incertidumbre ante el impacto negativo de los megaproyectos sobre las comunidades, ya que éstas pueden terminar desarticuladas. Algunos de estos megaproyectos están en una primera etapa de formulación y estudio (como el Canal Seco al Eje Cafetero y los Puertos de Tribugá y de Bahía Málaga) y otros ya se están desarrollando (como el plan IIRSA o de infraestructura física para Suramérica, el Puerto de Buenaventura y la siembra de palma aceitera).

Reconstrucción del tejido social e institucional. Ésta es una necesidad para la comunidad, en una región duramente golpeada por el conflicto. Por su biodiversidad, paramilitares, guerrilla, bandas emergentes y narcotraficantes han aprovechado muchas zonas como corredores de tráfico de armas y sustancias ilegales. El conflicto, la corrupción en muchas administraciones y el abandono estatal han causado una crisis social que se expresa en el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, según el cual, Chocó (79,1%), Cauca (46,4%) y Nariño (43,8%) tienen un NBI mucho mayor al promedio nacional (27,6%).

Situación social. Para la población son indispensables políticas públicas que reconozcan los derechos de las comunidades étnicas, como la autonomía y la tierra; cumplir las metas del milenio para eliminar la exclusión social y económica; garantizar la generación de ingresos para reducir la pobreza; prevenir la deserción escolar y garantizar que toda la población esté cubierta por el Sistema de Seguridad Social.

Al votar, cada persona lleva en mente ideales para su entorno social.

© Foto Astrid Elena Villegas





Las manifestaciones de los ciudadanos para expresar sus preocupaciones y propuestas deben ser escuchadas y tenidas en cuenta por los candidatos.

Preocupa la situación de los jóvenes, tanto evitar que sean reclutados por grupos ilegales, como desvincularlos del conflicto; por esto se propone su acceso a la participación social.

Política de paz integral. En esta zona del país los ciudadanos piden una política que tenga perspectiva de región y que caracterice al conflicto de manera integral, teniendo en cuenta lo social, lo político, lo económico, lo cultural y lo ambiental. Esto incluye acciones para reconstruir el tejido social e implica reparación integral y garantías de no repetición.

Nororiente: la política limitada

A pesar de que la población del Norte de Santander y Santander manifiesta su preocupación por las consecuencias del conflicto, en las agendas programáticas de los candidatos el tema de seguridad se enfoca en la criminalidad, pero no en la confrontación armada ni en sus efectos.

Conflicto y seguridad. Una de las principales preocupaciones es el control que ejercen grupos armados ilegales, en su mayoría las Águilas Negras, en varios barrios de Bucaramanga y Barrancabermeja. Según la Misión de Observación Electoral, MOE, en época de elecciones dichos grupos ejercen presión sobre sus habitantes para apoyar a ciertos candidatos y cohibir otras campañas.

El noveno informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) señala que Norte de Santander se encuentra "entre las zonas de retorno de desmovilizados de las autodefensas que han registrado presiones a éstos para que hagan parte de estructuras ilegales. Lo anterior ha resultado en el retorno de algunos ex combatientes a la ilegalidad".

Para el Observatorio de Derechos Humanos y Desarrollo de la Corporación Compromiso, "sólo algunos candidatos a Concejo hablan de la convivencia, mientras los candidatos a Alcaldías hablan de la inseguridad generada por los robos y no por los asesinatos que vienen ocurriendo".

Organización social. El fortalecimiento de las organizaciones sociales es otra prioridad que mencionan académicos del Nororiente colombiano, ya que la persecución sufrida por numerosos líderes sociales ha debilitado dichas organizaciones, lo que afecta la democracia.

Wilman Flórez, participante de la Mesa de trabajo de conflicto y paz de Barrancabermeja, de la ONG Planeta Paz, afirma que "el miedo y el hambre de la gente ha llevado a que los partidos políticos permeen a las organizaciones sociales". Esto ha generado que, en muchos casos, cambien sus banderas por los intereses de los movimientos políticos.

El Centro y la inseguridad

La situación social, el desarrollo económico y la seguridad son algunos de los temas más críticos en el Eje Cafetero, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá.

Situación social. Gustavo Ocampo, de la MOE en Caldas, advierte que son prioritarias las medidas para enfrentar el desempleo y la inseguridad. Para el 2005, Boyacá, Tolima y Huila poseen un NBI mayor al promedio nacional. La movilidad, el desempleo y la escasez de vivienda son otros temas que han sido señalados por algunos líderes ciudadanos como los más críticos.

Lograr un mayor desarrollo social y económico es una de las preocupaciones de la población, ya que a pesar de que reciben ingresos provenientes de las regalías petroleras, éstos no se ven traducidos en desarrollo equitativo para la población.

Seguridad. Los ciudadanos reclaman medidas para combatir la inseguridad. Aunque en Bogotá han mejorado los índices de seguridad, la situación que se presentó entre enero y julio de 2007 es una voz de alerta. Según la Vicepresidencia de la República, en esos siete meses el mayor número de homicidios se presentó en Bogotá y Risaralda, con 792 y 430,

“El reconocimiento de los derechos de las comunidades étnicas, como la autonomía y la tierra, son necesidades manifiestas.”

respectivamente. Por esto, los candidatos insisten en que es prioritaria la efectividad de los organismos de seguridad, así como la resolución de los conflictos intrafamiliares con ayuda profesional.

Suroriente: organizaciones sociales debilitadas

Los ciudadanos piden mayor atención de los candidatos sobre el impacto social de los megaproyectos y un mejor desarrollo económico y social que incluya a las organizaciones sociales.

Conflicto. En el Meta, la desaparición forzada y el secuestro impactan importantes sectores de la población, mientras los indígenas son la población más afectada por el desplazamiento en la región. Líderes del Meta se encuentran preocupados por la alta incidencia de los paramilitares en las acciones de gobierno. La utilización de rentas legales e ilegales, así como las regalías y los recursos del narcotráfico, han sido denunciadas como factores que alimentan el conflicto en la región.



En el centro del país, una de las preocupaciones de la población es lograr un mayor desarrollo social y económico con equidad.

Organizaciones sociales. En Caquetá y Putumayo las organizaciones sociales están debilitadas como consecuencia del conflicto. Por eso piden que los candidatos tomen medidas efectivas para que sus derechos fundamentales sean respetados y se reivindique el rol que tienen en la sociedad. "Dicho debilitamiento es consecuencia de la represión con que se ha respondido a las marchas campesinas", dice Luis Alberto López, coordinador de la Mesa Ciudadana por la Paz en Caquetá.

Megaproyectos. En Putumayo también hay preocupación por la incursión de grandes capitales, que llegan detrás de los megaproyectos. Según Sigifredo Arciniegas, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Mocoa, el problema de los grandes capitales es que "la democracia está siendo reemplazada por quien dé más plata".

Temas sociales. El fortalecimiento del capital social, integrando la educación y la ciencia para el desarrollo social y productivo, y la elimi-

“Se requieren gobernantes que garanticen el uso transparente de los recursos derivados del petróleo en Putumayo, Casanare y Meta”.

nación de la pobreza deberían ser ejes fundamentales de las agendas de los candidatos, dice el analista Javier Fierro, del Meta. Los altos índices de NBI así lo indican. Vaupés (54,8%), Vichada (66,7%), Guainía (60,4%), Amazonas (44,1%), Putumayo (34,8%) y Caquetá (41,6%) tienen índices de NBI muy por encima del promedio nacional. Sin embargo, Luis Alberto López advierte que se siguen ofreciendo soluciones asistencialistas y solamente obras de infraestructura.

Desarrollo económico. Se requieren gobernantes con capacidad de planeación, que garanticen el uso transparente de los recursos derivados del petróleo y de la inversión privada en Putumayo, Casanare y Meta, con el fin de generar equidad y crecimiento económico.

Las denuncias por desviación de los recursos provenientes de regalías llevaron al Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción a ela-

borar un Mapa de Riesgos, en el cual se encontró enriquecimiento de particulares, desviación de recursos, traslado irregular de fondos, implementación de proyectos innecesarios, favorecimiento de terceros, sobrecostos y adjudicación de ofertas no convenientes.

Costa Caribe: lo social y la corrupción

La corrupción y los problemas sociales generan gran inquietud en la Costa Atlántica.

La situación social. La inequidad en la región, donde conviven grandes capitales y una mayoría de población en la pobreza, es considerada una prioridad. El nivel de necesidades básicas insatisfechas en la Costa es alto. Córdoba se encuentra entre los

cinco departamentos con más alto grado de indigencia, mientras Guajira y Córdoba hacen parte del grupo de departamentos más rezagados por su nivel de desnutrición.

La dificultad para conseguir empleo agobia a numerosos pueblos del Caribe. En algunas ciudades, como Riohacha, la principal fuente de empleo es la administración pública. "Si tú no ganas con el candidato, quedas desempleado", dice Fidel García, Asesor de la Escuela de Gobernabilidad y Liderazgo de la Gobernación de la Guajira.

La democracia. En la Costa hay preocupación por la corrupción y las alianzas entre la administración pública y sectores de la sociedad con intereses particulares e incluso con ilegales. Diógenes Rosero, coordinador de la MOE en Atlántico, señala que "hay grupos que han luchado por mejorar la democracia en la región, pero realmente lo que prima es el concubinato entre grupos políticos y grupos de poder".

Narcotráfico y contrabando. Por su condición de puerto, el Caribe es un corredor para el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esto ha puesto en riesgo la seguridad de los ciudadanos y la transparencia de la administración pública. Se teme que, como en el pasado, estas fuerzas ilegales influyan y apoyen campañas electorales.

Explosión inmobiliaria. El auge de la construcción en las capitales de la Costa ha conducido a una fuerte lucha por el control de tierras, donde ya no hay espacio físico para construir. Fredy Goyeneche, profesor de la Universidad de Cartagena, considera que el proyecto de rescate de la Ciénaga de la Virgen puede convertirse en un nuevo caso de corrupción, como los que anteriormente han sido motivo de escándalo en la ciudad.

Éstos son sólo algunos de los temas que los ciudadanos consultados en cada región del país consideran como prioritarios. En el ejercicio de la gobernabilidad, las demandas de la población no sólo deben ser escuchadas, sino incluidas en los planes de desarrollo para que se conviertan en políticas públicas. Todavía hay tiempo para que esas demandas sean atendidas por los aspirantes que participarán en las elecciones del próximo 28 de octubre. ▀

Elecciones en el Caribe: entre la parapolítica y el continuismo

Por **Alberto Orguloso M.**

Decano Facultad de Humanidades, Universidad del Magdalena

Hay muchas expectativas y pocas posibilidades de quiebre en el mapa político del Caribe colombiano. Lo que más sorprende es la feria de avales de partidos, el número de candidatos en los partidos de la coalición uribista y la influencia paramilitar. Están en disputa dos modelos de actuación política y de gobierno: los que representan a la vieja clase política, algunos de ellos en alianza con sectores cuestionados, versus nuevos movimientos y líderes políticos que aún tienen decencia.

Hay evidencias que hablan de la continuidad de una especie de fusión entre cleptocracia criolla y plutocracia con respaldo armado, donde las élites políticas tradicionales, que han gobernado directamente o con apoyo de grupos ilegales, de ser elegidas seguirían manejando la administración pública local con la captura de recursos públicos y el favorecimiento privado en las decisiones del Estado local, verbigracia de las concesiones privadas de servicios públicos y el recaudo de impuestos. El Caribe tiene que recuperar la dignidad política y social y cambiar el curso de la historia a través del voto limpio por la democracia y el bienestar.

El periscopio político: Las inscripciones de candidatos a gobernaciones, alcaldías y concejo en el Caribe muestran que: i) algunos políticos que ocuparon cargos vuelven al ruedo o lo heredan sus hijos; ii) liberales y conservadores no son la mayoría en el número de avalados, como tradicionalmente habían sido y; iii) no hay candidaturas únicas pero sí coaliciones cuestionadas.

De acuerdo con el número de inscritos en la Registraduría Nacional del Estado Civil, al menos el 60% de los candidatos a las gobernaciones y alcaldías de las ciudades capitales de ocho departamentos del Caribe están avalados por partidos de la coalición uribista, algunos de ellos elegidos a nombre de casas políticas tradicionales; muy pocos de trayectoria empresarial o líderes ciudadanos que representen renovación política. Si bien 300 candidatos en el Magdalena, 37 a la gobernación y 61 a las alcaldías de capitales, aspiran a ser elegidos, esto no significa una mayor participación libre de los ciudadanos.

Contrasta que Arturo Calderón, candidato a la Gobernación del Cesar (apoyado por Hernando Molina y Álvaro Araujo, ambos procesados por parapolítica), y Edgar Santos, a la Alcaldía de Santa Marta (supuestamente apoyado por Enilce López "La Gata"), estén aspirando por movimientos "independientes" o firmas. Omar Díazgranados, candidato a la Gobernación del Magdalena por el Partido de la U, estaría respaldado por Trino Luna Correa y el "barrio samario" (Luis Vives, Alfonso Campo, Jorge Caballero y Karely Lara, todos procesados por



parapolítica). Díazgranados fue secretario privado de Luna Correa con quien manejó recursos de la salud al amparo del hermano del ex gobernador; Sandra Pubiano, su jefe de campaña, fue asesora de cabecera de Luna y gobernadora encargada por él mismo, y Pablo Beltrán, asesor de Díazgranados, fue secretario de despacho, delegado del gobernador al Consejo Superior de Unimagdalena y mentor de la persecución contra la Universidad y su rector titular, Carlos Caicedo.

Los más opcionados a la Gobernación del Magdalena son Díazgranados y José Luis Pinedo —hijo del Senador Miguel Pinedo— respaldado por el partido liberal oficialista, incluido el sector de J.J. Vives. Álvaro "El Flaco" Ordóñez Vives (ex alcalde de Santa Marta) declinó en favor de Pinedo. Los candidatos Bilbrun Tovar (del Polo Democrático) y Roberto Bornacelli (liberal avalado por ASA) no tienen opciones.

Los más opcionados a la Alcaldía de Santa Marta son José Domingo "Chelo" Dávila (ex gobernador del Magdalena), respaldado por Convergencia Ciudadana y una coalición del "barrio samario", y Juan Pablo Díazgranados, del Partido Liberal, proveniente de sectores empresariales y respaldado por una coalición liberal-conservadora.

Muchos son los casos de fraudes o delitos electorales en la Costa. Varios candidatos han denunciado trasteo de votos en municipios de Magdalena y Atlántico.

En Ciénaga, Magdalena, denunciaron ante el Registrador Nacional la trashumancia electoral de 10 mil personas, las cuales aparecen inscritas en el

“El Caribe tiene que recuperar la dignidad política y social y cambiar el curso de la historia a través del voto limpio por la democracia y el bienestar”.

censo electoral. También se habrían presentado irregularidades de clonación de cédulas en sectores de Santa Marta y aledaños a la Sierra Nevada, pero aún la Registraduría Nacional no se pronuncia al respecto. En Remolino ocurrió este mismo delito porque el 80% de la población aparece en el potencial electoral y dos candidatos a la alcaldía recibieron amenazas.

El candidato a la Alcaldía del municipio Campo de la Cruz, Atlántico, por Convergencia Ciudadana, fue capturado recientemente en Barranquilla por vínculos con Jorge 40. Varios candidatos denunciaron falta de garantías de la Registraduría de Barranquilla a cargo de Víctor Polo, ex abogado de Alejandro Char. Se rumora que Jorge 40 sigue teniendo influencia en el mapa electoral de la costa.

Las evidencias muestran el continuismo del modelo bipartidista avalado por un espectro variopinto de partidos afectos al gobierno y por la influencia de los tentáculos del paramilitarismo, que siguen actuando e influyendo en la política y la administración local, y presionando al electorado. ■

Claves para tener en cuenta en la reparación a los indígenas

En Colombia, el conflicto armado ha contribuido al debilitamiento de las organizaciones indígenas y a la pérdida de sus tierras. La reparación a los indígenas debe tener en cuenta sus conceptos de verdad, justicia y reparación, y otros aspectos de su vida que han sido afectados, como la autonomía, las autoridades, las relaciones familiares y la relación con la naturaleza.

La mañana del 16 de diciembre de 1991 varias familias y líderes indígenas, algunos tras varias horas de recorrido, se reunieron en la hacienda El Nilo, en el norte del Cauca, en busca de una salida para recuperar las tierras que antes les pertenecían y que habían perdido, en parte debido al conflicto armado. El Nilo era una de ellas. Varias familias indígenas se habían asentado en la parte alta de la finca, pero luego de su venta, los nuevos propietarios los amenazaron para que salieran de allí.

En la reunión de esa mañana, los indígenas acordaron proponerle al entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, que comprara la finca. Con ese primer consenso, al caer la tarde muchos regresaron a sus hogares y los que venían de más lejos se quedaron a dormir allí. En la noche, desconocidos llegaron disparando, mataron a veinte personas y quemaron los ranchos. Tras la masacre de El Nilo, muchas comunidades indígenas, como el pueblo Nasa, se han visto seriamente

afectadas por el conflicto y, por lo tanto, merecen ser reparados. Pero ¿cómo debe ser la reparación a los pueblos indígenas?

"Para nosotros —dice Lisardo Domicó, secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC—, la reparación colectiva es más importante que la individual. Cuando desaparecen o matan a un líder, el daño es para la familia y la comunidad. Si asesinan a un gobernador, a un mamo o a un jaibaná no sólo sufre una familia, porque ellos han jugado un papel de protección en la comunidad".

Y es que en gran medida los líderes han sido el blanco de los ataques. "El conflicto ha socavado los movimientos indígenas que hemos construido durante años", afirma Domicó. Hoy, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de Derechos

El Kankuamo es considerado el pueblo indígena con mayor número de víctimas del conflicto, pues más de 200 de ellos fueron asesinados entre 2000 y 2006.





Para varios pueblos indígenas, justicia no se asemeja a castigo, sino a vivir en armonía y equilibrio.

de los pueblos indígenas el pasado 13 de septiembre, y el gobierno de Colombia se abstuvo de votarla, tanto la Procuraduría General de la Nación como la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, adelantan procesos de consulta con poblaciones indígenas para establecer cómo han sido afectadas por el conflicto y de qué manera sus integrantes consideran que se podría dar la reparación.

¿Cómo los ha afectado el conflicto?

El Kankuamo es considerado el pueblo indígena con mayor número de víctimas del conflicto, según señala la ONIC. Más de 200 de ellos fueron asesinados entre 2000 y 2006. También los Wiwa, Embera Katío, Embera Chamí, los Paeces, los Pijao, los Awá, el pueblo Nasa, entre otros, se han visto en situación de alto riesgo por la presencia de actores armados.

Según la Vicepresidencia de la República, 537 indígenas han sido asesinados entre 2002 y 2006. Por su parte, el estudio *Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia 1974-2004*, liderado por el Centro de Cooperación al Indígena, Cecoin, recoge un total de 1.889 asesinatos entre 1974 y 2004, y expresa que "los homicidios políticos de indígenas entre 2000 y 2004 llegan a una tasa que es tres veces la nacional. De los 92 pueblos indígenas que se distribuyen en la geografía nacional, 37 son afectados por el homicidio político".

La violencia contra ellos ha generado el debilitamiento de sus organizaciones y la pérdida de tierras, lo que a su vez ha producido una reducción de sus territorios. Esto tiene una importancia especial para la cultura indígena: "Para nosotros, el desarrollo social y cultural es en el territorio y no puede pensarse fuera de él", dice Domicó. Además, los indígenas han visto afectada su relación con la naturaleza. Han sido irrespetados lugares sagrados, ya sea porque han ocurrido hechos de violencia o porque los diferentes actores armados o grupos económicos se han apropiado de ellos. Los ríos donde habitan los espíritus de

algunos de sus ancestros han sido depositarios de cuerpos de víctimas. Y los caminos para buscar el yagé, como en el Cauca, han sido minados o se ha prohibido su paso.

El desplazamiento, el confinamiento y las restricciones para llevar alimentos hasta los resguardos, a las que se ven sometidos cuando se encuentran con peajes militares o de actores armados ilegales, han provocado una difícil situación en estas comunidades. "Cuando una comunidad indígena es afectada por la guerra, se ve obligada a desplazarse y se genera una ruptura de raíz, una ruptura cultural y política: se dejan las relaciones familiares y las ceremonias; no pueden pescar ni cazar, parte de sus grandes conocimientos, e incluso pierden la medicina tradicional", sostiene Domicó.

La presencia de los actores armados ha hecho mella también en el manejo de la autonomía indígena debido al irrespeto que sufren las

“Para los indígenas el primer paso hacia la reparación y la reconciliación es el reconocimiento como pueblos y el respeto a sus territorios. Si no tienen tierra en donde vivir no es posible conservar su cultura”.

autoridades y en especial las tradicionales. "Con frecuencia las comunidades se han visto atrapadas en medio del fuego cruzado de los combates. Muchos indígenas, al tratar de hacer respetar los derechos de la comunidad, han sido declarados como objetivo militar de los actores en guerra y otros han sido obligados a servir a uno y otro bando, lo cual los expone inmediatamente", comenta Ezequiel Vitonás, líder del pueblo Nasa.

La estructura familiar también se ha visto desmembrada: para evitar que sean reclutados, muchas familias envían a sus hijos a la ciudad. Allí, los jóvenes se ven enfrentados a un mundo desconocido y con escasos recursos para salir adelante. Entre tanto, su familia sufre su

GUATEMALA, UNA MIRADA INTERNACIONAL

El 18 de julio de 1982 más de 250 personas de la etnia Mmaya Achí fueron asesinadas en Guatemala. Desde entonces el caso se conoció como la Masacre de Plan de Sánchez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos identificó varias afectaciones colectivas sobre las cuales sentenció medidas de reparación que responden a los daños individuales y colectivos. Esas afectaciones detectadas fueron:

- los sobrevivientes no pudieron enterrar a los muertos de acuerdo con los rituales funerarios de su cultura;
- se causó daño a la comunidad al irrespetarles sus rituales funerarios;
- las formas tradicionales de gobierno maya fueron reemplazadas por un sistema de control militar en el pueblo donde habitaba la comunidad;
- la comunidad no pudo practicar libremente y por un tiempo sus ceremonias, rituales y otras expresiones culturales tradicionales, lo que afectó "la reproducción y transmisión de la cultura";
- la muerte de los mayores y de las mujeres —encargados de la transmisión oral de la cultura— produjo una suerte de vacío cultural.

ausencia y en la comunidad disminuye significativamente la posibilidad de continuar como pueblo en el futuro. El conflicto ha violentado lo más sagrado en el mundo indígena: las mujeres y los niños. Para los Wayúu, por ejemplo, éstos son intocables, incluso cuando se enfrentan entre clanes. Pero el conflicto ha sobrepasado esa barrera y ha generado, además, enfermedades de transmisión sexual. También se ha irrespetado una costumbre sagrada de este pueblo: que las mujeres sean

justicia y reparación. Como dice Danilo Valbuena, Coordinador del grupo de asuntos étnicos de la Procuraduría, "lo primero para reparar a los indígenas es estudiar su cosmogonía para ver cómo conciben la reparación y la justicia". La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, realizó una consulta social con representantes de las etnias Inga, Nasa y Uitoto y con representantes de instituciones del Estado y organizaciones sociales en Putumayo. "Allí se planteó que mientras para el mundo occidental justicia se asocia con castigo, para ellos significa vivir en armonía y equilibrio", señala Gunhild Schwitalla, coordinadora de la CNRR para el tema de poblaciones específicas.

“Para los Kankuamo, conocer la verdad implicaría que los perpetradores se sienten con los mamos en actitud de arrepentimiento y confesión. Sólo de esta manera se restituiría la armonía para la comunidad”.

quienes preparen los cuerpos después de la muerte. Por eso, cuando llega la Fiscalía a sacar los cuerpos de las fosas comunes que se han descubierto, ellas tratan de hacer valer su conocimiento y sus normas, pero no son escuchadas.

Otra concepción de verdad, justicia y reparación

El primer aspecto para tener en cuenta al planear la reparación a los pueblos indígenas es que ellos tienen sus propios conceptos de verdad,

Para los Kankuamo, por ejemplo, "conocer la verdad implicaría que los perpetradores se sienten con los mamos en actitud de arrepentimiento y confesión. Sólo de esta manera se restituiría la armonía para la comunidad", cuenta Luis Fernando Arias, líder kankuamo. Durante el Encuentro Nacional de Víctimas Pertencientes a Organizaciones Sociales, realizado en julio en Bogotá, las organizaciones indígenas y afrodescendientes expusieron la necesidad de recuperar las formas de justicia de los grupos étnicos para enjuiciar a los responsables de crímenes contra dichos grupos, a través de la creación de un tribunal internacional por la dignidad de los pueblos negros e indígenas.

Una conclusión a la que llegó el pueblo kankuamo, por ejemplo, es que la responsabilidad no puede recaer solamente sobre la guerrilla o el líder paramilitar Jorge 40, de amplia influencia en la Guajira y Magdalena; "el Estado estaba obligado a protegerlos y a no utilizar la fuerza para afectarnos", sostiene Arias.

Propuestas frente a la reparación

Los indígenas están elaborando propuestas sobre cómo deben ser reparados. "La muerte de un ser querido no tiene precio —dice Lisardo Domicó—. Nosotros vamos con cuidado. La reparación tiene que ir desde la raíz de las familias y la comunidad. No es simplemente entregar un cheque y ya".

Cuando desaparecen o matan a un gobernador, a un mamo o un jaibaná, el daño es para la familia y la comunidad.



© Corresia - Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

Por eso, la ONIC comenzó un proceso de consulta entre los pueblos. "Sólo después de ese proceso y del acompañamiento a los diferentes grupos afectados por el conflicto —continúa Domicó— tendremos una propuesta de lo que consideramos apropiado como reparación. Por el momento, dos temas son claras necesidades de los pueblos: tierra donde vivir y financiamiento de los planes de vida de las comunidades".

Varios son los aspectos para tener en cuenta, dice Arias: lo cultural, como prohibir que haya profanación

de lugares sagrados; lo territorial, la autonomía indígena, y lo social, que incluye la reconstrucción del tejido social, un no a la estigmatización y una atención especial a la salud mental de la población.

Actualmente, la CNRR diseña el Plan Nacional de Reparación, que será guía para la reparación administrativa que el Estado implemente. En el caso de los pueblos indígenas, este Plan se basará en las consultas que actualmente adelanta la Comisión. Otros insumos que serán importantes para este Plan son las conclusiones de los encuentros que la ONIC adelanta con las comunidades, así como el informe presentado por la Procuraduría el pasado 25 de septiembre, orientado a "construir unos criterios de reparación a los indígenas, que aseguren la garantía de sus derechos", dice Danilo Valbuena.

Otros insumos serán los procesos de reparación en otros países (Ver *Guatemala, una mirada internacional*), los que han resultado de demandas internacionales y de diálogos como los actuales entre el Gobierno y el pueblo Nasa (Ver *La reparación de la masacre del Nilo*). Por su parte, la Comisión incluyó al pueblo kankuamo dentro de las diez experiencias piloto de reparación que seleccionó para obtener



Los lugares sagrados se han visto violados, ya sea por hechos de violencia, o porque otros actores se han apropiado de ellos.

lecciones que contribuyan a la construcción del Plan de Reparación. Luego de reuniones entre la comisión y los líderes de esta comunidad, se acordó que ésta entregará una propuesta de reparación que sea la base sobre la cual diseñar un plan piloto de reparación para los kankuamos.

"Para los indígenas —afirma Schwitalla, de la CNRR— el primer paso hacia la reparación y la reconciliación es el reconocimiento como pueblos y el respeto a sus territorios. Si no tienen tierra en donde vivir no es posible conservar su cultura". En ese sentido, afirma Catalina Díaz, del Centro Internacional de Justicia Transicional, "las reparaciones constituyen también una forma de reconocimiento, son una expresión material del reconocimiento que se les debe a quienes les han sido violados sus derechos".

Dentro del plan, advierte Arias, líder kankuamo, "es muy importante una mirada retrospectiva y, además, garantizar que lo que ocurrió no vuelva a repetirse. Ya nuestros padres y abuelos están debajo de la tierra, pero vienen otras generaciones que tienen el derecho de no volver a sufrir como lo hicieron sus ancestros". ▀

LA REPARACIÓN DE LA MASACRE DE EL NILO

Luego de la demanda de la Organización Indígena del Norte del Cauca, ACIN, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de El Nilo, en 1995 se inició un proceso de solución amistosa entre el Estado y los indígenas. Como parte de la reparación colectiva al pueblo Nasa, un primer acuerdo fue entregarles 15.663 hectáreas en los dos años siguientes.

El Estado colombiano reconoció internacionalmente su responsabilidad en la masacre de El Nilo y ha entregado, hasta el momento, 9.893 hectáreas, según el Ministerio del Interior y de Justicia. Sin embargo, ante los retrasos para el cumplimiento de la totalidad del compromiso, en 2005 se estableció un nuevo acuerdo entre las partes: las

tierras que faltaban por entregar serían de vocación productiva, ya que el 60% de las entregadas hasta el momento eran —según el informe de la ACIN— "áreas de ladera con fuertes pendientes, sitios sagrados y áreas erosionadas".

Actualmente, el Ministerio trabaja sobre un listado de tierras entregado por los indígenas para mirar la posibilidad de comprarlas y continuar así con la reparación. "Se han presentado dificultades —dice Daniel Orozco, asesor del Ministerio— por el boom del alcohol carburante, que ha llevado a la masificación de los cultivos de caña, producción en la que están invirtiendo los empresarios del Valle. Esto ha hecho que la gente no quiera vender sus fincas. La decisión del Gobierno de invertir 20 mil

millones de pesos en ese sector también elevó los precios de la tierra".

El Estado tiene toda la voluntad y los recursos para cumplir los acuerdos, pero lo que ha faltado son tierras disponibles para comprar, insiste la viceministra María Isabel Nieto Jaramillo: "Por esto, se está dialogando sobre la posibilidad de comprar en otros departamentos donde ellos ya tienen asentamientos, como Huila, Caquetá o Putumayo. Nuestra intención es comprar predios con vocación productiva, vamos a mirar hasta dónde nos alcanza el presupuesto. Esperamos que para el 31 de diciembre tengamos gran cantidad de predios listos para adquisición".



© Cortesía Mara Repullo

La desigualdad es un factor generador de violencia, pues cuando no hay una acertada distribución de la riqueza, ésta no puede garantizar calidad de vida para toda la población.

El mito y las realidades sobre la pobreza y el conflicto

De acuerdo con los expertos, hay dos premisas claras frente al tema de la pobreza y el conflicto. La primera, la pobreza no genera conflicto, ya que éste se encuentra más asociado a la desigualdad y la riqueza. La segunda, el conflicto sí causa pobreza, ya que fractura el capital humano, físico y económico de un país.

¿Qué relación existe entre pobreza y conflicto? ¿La pobreza incide sobre la generación del conflicto o el conflicto incide sobre la pobreza? La violencia y la pobreza son el resultado de un complejo número de causas y por eso sería simplista explicarlas desde una sola variable. Lo que sí es claro es que en un país como Colombia el conflicto y la pobreza inevitablemente se cruzan. Este cruce, según los expertos, implica dos realidades y un mito. Las realidades son: la pobreza no genera conflicto, pero el conflicto sí genera pobreza. Y el mito es que la pobreza genera conflicto. Y es un mito básicamente por dos razones: porque se ha demostrado que lo que genera conflicto es la desigualdad y la falta de institucionalidad y porque en lo que sí existe una relación directa es entre la riqueza y la existencia de violencia.

El mito y las realidades

La desigualdad y la falta de institucionalidad: no es claro que la pobreza genere violencia, pero sí que la violencia causa pobreza. En este sentido, dice el analista Fernando Herrera, del PNUD, las condiciones que generan pobreza son la falta de institucionalidad y la desigualdad.

En el primer caso, por ejemplo, si no existen instituciones fuertes del Estado, los conflictos o diferencias que se generen en los territorios no podrán solucionarse a través de ellas, sino por medio de acciones de facto que probablemente serán violentas.

La desigualdad, por su parte, genera sentimientos de frustración y de injusticia y se convierte en una afrenta moral y económica, ya que las personas con menos recursos no pueden desarrollar mercados ni condiciones para mejorar su calidad de vida.

Precisamente, "los municipios tienden a ser más violentos cuando tienen mayor desigualdad frente a las posibilidades de que las personas y las familias utilicen plenamente su potencial para alcanzar las condiciones deseables de calidad de vida", plantea Alfredo Sarmiento del Departamento Nacional de Planeación, DNP. En este sentido, la desigualdad está positivamente relacionada con la violencia.

En los territorios donde no hay distribución de la riqueza, hay riqueza pero no desarrollo y, por lo tanto, la riqueza no se transforma en calidad de vida. En estas regiones el Estado no tiene la capacidad de redistribuir y por lo tanto la violencia se convierte en el método de distribución, afirma Teófilo Vásquez, investigador del CINEP.

Riqueza y violencia: es común que se exprese que las condiciones de pobreza son caldo de cultivo de la violencia. Sin embargo, en el estudio *Análisis de las relaciones entre violencia y equidad*, del DNP se plantea que la tasa de homicidios no se asocia positivamente a mayores niveles de pobreza y que, por el contrario, hay una relación positiva entre índice de homicidios y riqueza. "Tienen más probabilidad de sufrir violencia los municipios donde se dan posibilidades nuevas de acumulación de

riqueza”, señala la investigación. Esta acumulación se puede asociar a riquezas ganaderas, petroleras o cultivos ilícitos. “Esto quiere decir que los municipios más pobres no son los más violentos”. Este estudio concluye que “la violencia tiende a reproducirse con más probabilidades en sectores o zonas con altas posibilidades de acumulación económica y con presencia débil del Estado.

La desigualdad, junto con la existencia de rentas como el petróleo, las esmeraldas, el oro o la coca, algunas de las cuales permiten la financiación de grupos armados, son los factores que generan conflicto, expresa Fabio Sánchez, profesor de la Universidad de los Andes.

A partir de la década de los noventa, dice, hubo tres grandes detonantes del conflicto: el primero, el descubrimiento de yacimientos de petróleo; el segundo, el aumento de transferencias del gobierno a los municipios y el tercero, el traslado de los cultivos de coca de Perú hacia Colombia.

Si el factor hubiera sido la pobreza no se entendería, argumenta Sánchez, por qué mientras en Colombia la pobreza ha bajado de 55,7%, en el 2002, a 45,1% en el 2006, de acuerdo con el DNP, y ha aumentado la presencia del Estado, el conflicto se ha intensificado debido a las rentas en disputa que fueron atractivas para los grupos armados ilegales.

Sin embargo, hay otra variable para tener en cuenta: el modelo económico y su influencia sobre la persistencia de la pobreza, como lo sostiene David Castells, Licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona y quien ha investigado el tema de la pobreza en Colombia. En su documento del Observatorio de Economía Latinoamericana *¿Creciendo para quién?* afirma que el crecimiento económico en Colombia, principalmente desde la apertura, no está disminuyendo el nivel de pobreza del país, ya que ésta trajo una mayor volatilidad de los ciclos económicos y, por lo tanto, una mayor vulnerabilidad de las personas frente a la pobreza.

Según el autor, en épocas de expansión económica la población pobre no ha sido la más favorecida, pero en épocas de crisis sí ha sido la más perjudicada. Situación que encuentra explicación en dos razones: la primera, el arraigo de la pobreza misma y la segunda, la política económica, la cual ha generado expansión de la economía, pero al mismo tiempo desigualdad y pobreza. Esto se debe a que la política económica en Colombia no prioriza el desarrollo humano y la erradicación de la pobreza y, por el contrario, las políticas de desarrollo de capital humano están subordinadas a los buenos resultados macroeconómicos, señala Castells.

Mirada por departamentos

¿Qué relación entre pobreza y conflicto se observa según el departamento? Los datos de línea de pobreza más actualizados que maneja el DNP por departamento son los del 2005 (Ver Cuadro 1), aunque el porcentaje de línea de pobreza nacional se encuentra para el 2006. El Cuadro 1 muestra que sólo en tres departamentos existe una correlación positiva entre alto porcentaje de línea de pobreza y altos índices en los indicadores de violencia: Antioquia, Nariño y Tolima.

Este cruce estadístico también revela que hay departamentos donde coinciden un alto porcentaje de pobreza y un alto índice de alguno de los indicadores de violencia, lo cual da una voz de alerta en esos territorios, aunque eso no significa que la pobreza genere violencia. Esta situación se presenta en Bolívar, Caquetá, Cesar, Caldas, Meta y Tolima, donde se combinan pobreza y alto número de personas desplazadas. En Cauca,

CUADRO 1. LÍNEA DE POBREZA E INDICADORES DE CONFLICTO - 2005

DEPTO.	% LÍNEA DE POBREZA (L.P.)	SECUESTROS	HOMICIDIOS	CASOS DE MASACRES	DESPLAZAMIENTO EXPULSIÓN
Antioquia	54,91	62	2.374	4	30.382
Atlántico	48,82	9	637	0	564
Bogotá	28,41	36	1.669	3	455
Bolívar	52,94	31	444	0	16.982
Boyacá	67,61	10	191	0	1.360
Caldas	57,34	24	696	1	11.469
Caquetá	62,18	27	405	2	13.412
Cauca	61,06	60	526	0	8.503
Cesar	58,24	13	374	1	12.617
Córdoba	66,27	2	173	0	5.569
Cundinamarca	49,67	57	424	2	3.607
Chocó	78,54	16	153	0	9.141
Huila	59,72	23	404	3	4.719
La Guajira	55,9	16	315	2	6.287
Magdalena	57,45	14	427	0	9.594
Meta	44,83	86	535	1	13.424
Nariño	64,04	61	738	5	9.382
Norte Santander	57,55	22	786	2	6.964
Quindío	45,63	0	302	0	751
Risaralda	45,72	23	915	0	1.671
Santander	48,99	31	515	1	5.100
Sucre	69,46	13	151	0	7.072
Tolima	56,85	64	373	0	11.090
Valle	37,56	47	3.533	16	5.438

Fuente: MERPD - DNP y Observatorio de Derechos Humanos-Vicepresidencia de la República. Los datos de línea de pobreza que maneja el DNP sólo se registran para estos 25 departamentos en el 2005.

Cundinamarca, Meta y Tolima la relación se da entre pobreza y alto número de secuestros.

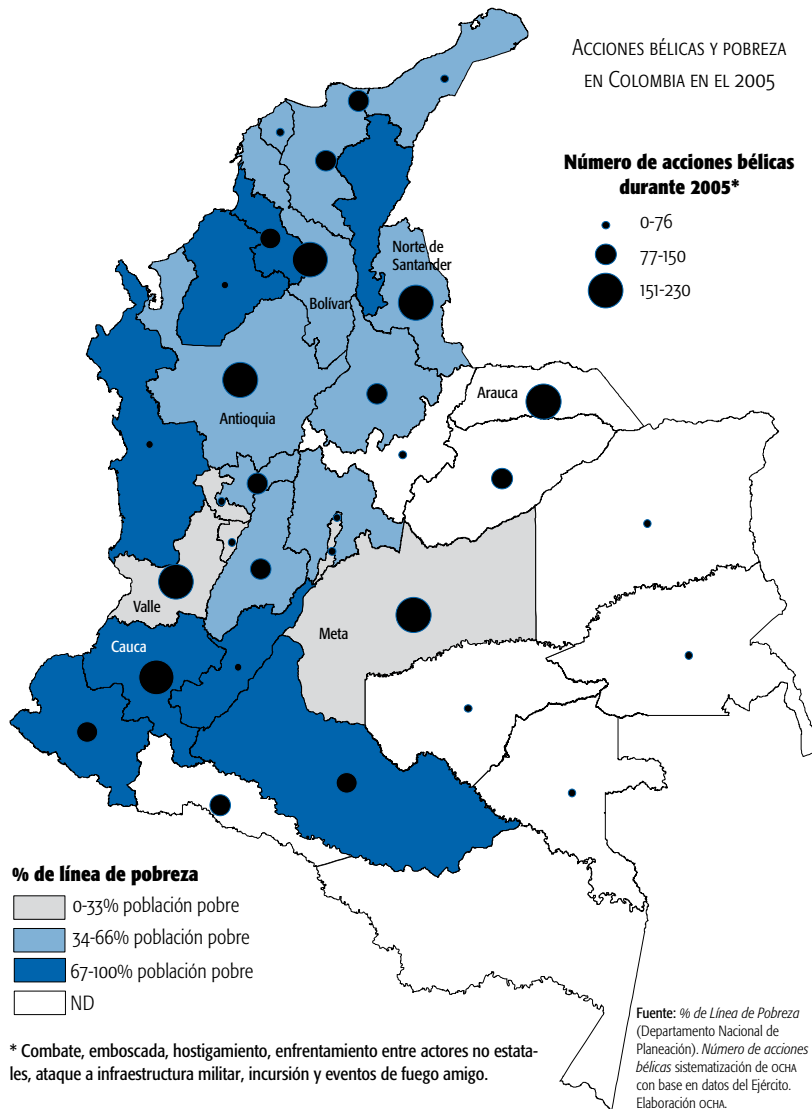
El conflicto, generador de pobreza

El conflicto empobrece, lo dicen la realidad, los expertos y los estudios. En la medida en que el conflicto impide la actividad productiva, tiene efectos nocivos sobre la economía, la infraestructura económica y el desarrollo social.

“Tienen más probabilidad de sufrir violencia los municipios donde se dan posibilidades nuevas de acumulación de riqueza. Y esta acumulación se puede asociar a riquezas ganaderas, petroleras o a cultivos ilícitos”.

Por ejemplo, el conflicto ha impedido que las tasas de mortalidad infantil disminuyan más rápido de lo que deberían, ha hecho que la deserción escolar sea más alta y que los salarios en las zonas rurales sean más bajos de lo que hubieran sido si no hubiera conflicto, advierte Sánchez.

El conflicto convierte a sus víctimas en pobres en extrema vulnerabilidad, ya que los despoja de sus medios básicos de vida y destruye el



En el más reciente informe sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio para Colombia, de abril, presentado al país por el Gobierno y Naciones Unidas, se establece que en los últimos diez años fueron asesinadas más de 50 mil personas, de las cuales 1.600 eran líderes políticos, 140 alcaldes y 180 funcionarios del Estado. Muchas personas han sido obligadas a dejar sus medios de vida y han pasado a formar parte de los cinturones de miseria de las ciudades.

"Durante el período 1999–2003 los costos generados por las diversas manifestaciones de la violencia armada en Colombia han sido estimados en 16,5 billones de pesos de 2003, que equivalen a 7,4% del PIB de 2003, a 2,7 veces el déficit del sector público consolidado de 2003", dice el informe

La mayoría de las víctimas de la violencia son pobres. "Los pobres no son la causa de la violencia, son sus víctimas", afirma Sarmiento. Ellos son reclutados en la guerra como mano de obra y como defensa en el campo de batalla. En muchos casos la violencia termina siendo una oportunidad de empleo.

Por otra parte, cuando se está excluido de la participación económica, social y política, fácilmente se cae en la creencia de que la única forma de ser importante es a través de la posesión de armas, agrega.

La población pobre es más vulnerable a la violencia porque, entre otras razones, no tiene cómo defenderse. Cuando se presenta un conflicto, las personas de mayores ingresos tienen más facilidades de movilidad mientras que la población pobre no. En este sentido, Sarmiento argumenta que el pobre es más vulnerable que quien no lo es y, en esta medida, es más vulnerable a las consecuencias de la violencia.

El análisis sobre los mitos y las realidades acerca de la relación entre conflicto y pobreza revela que la pobreza no es un factor generador de violencia ni un

caldo de cultivo para la misma, pero los pobres sí son los más afectados por el conflicto. Por el contrario, la baja presencia del Estado, la inequitativa distribución de la riqueza, la desigualdad y el descontento de las personas sí puede dar lugar al conflicto. ▀

NO ME ACOSTUMBRO A VIVIR AL RUEGUE

"Es difícil. Uno está enseñado a que, poco o mucho, tiene una plata segura al mes... y llegar uno a la ciudad a vivir a la voluntad de la gente, a pedir ropa pa' vestimos, para vestir a la hijas... no, no me gusta eso, no me acostumbro a vivir al ruego. Yo quisiera volver a tener mi trabajo, un empleo, un trabajo independiente, una generación de ingresos que pueda satisfacer las necesidades. Pero a uno le da mucha tristeza que los hijos pidan y uno no les pueda dar lo que necesitan: eso es muy difícil, eso sí no lo he podido superar. Porque si uno tiene al menos unos 200 mil, 300 mil pesos mensuales, bueno, ya es mucho lo que uno soluciona, pero es que ini siquiera

eso...! Entonces, cuando llegan los momentos de las enfermedades, se acaban de complicar las cosas, porque una enfermedad no da espera.

El estudio es lo más difícil que he encontrado yo porque siempre han estudiado mis hijas al ruego, a la limosna, y ellas también se sienten cansadas de que no puedan tener las cosas necesarias, de que son las últimas que entregan trabajos, porque no hay plata para copias y también se sienten frustradas. La niña grande me dice que ya no quiere estudiar más. Con 13 años, va en octavo y se quiere retirar del colegio porque dice que se siente cansada: de la casa a la escuela, media hora de camino en la mañana; en

la tarde, media hora de camino; hasta que no llegan a la casa no almuerzan y en la institución ni siquiera les han dado un cupo para el almuerzo. Le digo que estudie y le ruego. Una de las soluciones sería llevarla a un internado donde ella se dedique nada más que a estudiar, pero entonces no tengo la plata para pagar el internado. La ilusión mía es que ellas estudien, no que de pronto les toque como a uno: someterse a cualquier trabajo".

Testimonio editado de una maestra campesina, madre de tres hijas, desplazada del Catatumbo, Norte de Santander. Fuente: *Hablan las personas desplazadas en Colombia*, publicación del Consejo Noruego para Refugiados e IDMC, 2007.

La búsqueda de los desaparecidos y la antropología forense

Experiencias internacionales sobre la búsqueda de los desaparecidos demuestran que cada cuerpo devuelto cierra más de una herida y abre el camino hacia la verdad y, además, que preservar la memoria biológica y social de las víctimas es una tarea básica de los Estados.

Por Aldo Fernando Bolaños Baldassari

Directivo del Equipo Peruano de Antropología Forense-EPAF y de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense-ALAF



© Cortesía Simone Bruno

Uno de los principales componentes de una política de búsqueda de desaparecidos es el acompañamiento psicosocial a las familias víctimas, que ayude a cerrar las heridas

En muchos países del mundo hay miles de personas desaparecidas como secuela de conflictos armados internos, que se han dado bajo dictaduras y gobiernos civiles, militares o gobiernos supuestamente democráticos. A pesar del dolor inacabable de las familias y de la necesidad de cerrar las heridas que estos conflictos dejan, se ha avanzado poco en la búsqueda de estas personas cuyos derechos fundamentales fueron violados.

De forma general, algunas causas del escaso avance en la búsqueda de personas desaparecidas son la falta de voluntad política de los Estados, la vigencia de las fuerzas de la impunidad —quienes imponen el silencio a través de la amenaza y el miedo— o la falta de recursos económicos y técnicos ante la magnitud de tareas que, generalmente, trascienden las posibilidades de los Estados. En cualquiera de los casos, la gran indiferencia social ante la responsabilidad conjunta en la solución del problema genera que todo sea aún más difícil. A esta situación se suma la naturaleza del crimen de desaparición, que lleva implícita la

destrucción y desaparición total o parcial de los restos mortales de las víctimas, lo que hace que los cuerpos sean difíciles de encontrar y, a veces, una labor imposible.

Ejes de intervención

La experiencia ha demostrado que la búsqueda de las personas desaparecidas se da en tres ejes de intervención:

- Las acciones humanitarias, muchas veces urgentes y postergadas, que lleven a la ubicación, recuperación, identificación y devolución de los restos mortales a las familias y al cumplimiento de su derecho a saber.
- El desarrollo de procesos nacionales de reconciliación cimentados en la verdad y la justicia, y expresados en planes de judicialización, en la participación ciudadana, en las tareas de fiscalización y en un ordenamiento jurídico preventivo para este tipo de conflictos.
- El desarrollo de investigaciones que aseguren el cumplimiento de los estándares internacionales en calidad científica, en imparcialidad,

en independencia y en la capacidad de garantizar la integridad de la evidencia. Esto incluye el caso de las investigaciones antropológicas forenses, que son fundamentales en este tipo de indagaciones. Según los ejes planteados, tres son los componentes básicos de una política de búsqueda. El primero, contar con un organismo centralizador que organice las investigaciones antropológicas forenses y el acompañamiento psicosocial a las víctimas (en este concepto se incluye a las familias) y que además mantenga bien informada a la sociedad en general, y en particular a las familias, acerca de los avances y el estado de las investigaciones sobre personas desaparecidas, en los temas que no afecten la reserva judicial. Normalmente estas acciones sobrepasan la capacidad institucional, técnica y económica de los Estados y por eso las experiencias internacionales que se mencionan más adelante, pueden ser de utilidad. El segundo componente es un plan de judicialización integral que per-

“La recuperación, identificación y restitución de los restos de los desaparecidos son componentes principales de las intervenciones humanitarias y las reparaciones”.

mita, por un lado, establecer los casos de intervención forense según la prioridad estratégica y, por otro, desarrollar las investigaciones en un plazo prudencial. Teniendo en cuenta que la desaparición de personas ocasionada intencionalmente por cualquiera de las partes en el conflicto es una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y que se trata de un delito que no prescribe, su investigación está ligada a los procesos de judicialización. Por ello, las investigaciones que se realizan bajo el marco humanitario deben servir de aporte a aquellas que realizan fiscales y jueces, las cuales no deben impedir la búsqueda de los desaparecidos.

El tercer componente tiene que ver con la necesidad de desarrollar un Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual debe tener como subcomponente un Plan de Intervenciones Antropológicas Forenses. Este último Plan tendrá que abordar de modo integral cada etapa de la intervención: la investigación preliminar incluye los procesos de registro de la memoria biológica y social de los desaparecidos. Esto es fundamental para los procesos de identificación de los cuerpos ante su

hallazgo en un futuro cercano o lejano, y la definición de las circunstancias de la desaparición; los procesos de búsqueda y recuperación de los restos mortales y las escenas de crimen; los procesos de identificación y la determinación de la causa de muerte de las víctimas recuperadas; la restitución de los restos mortales a los familiares.

Una revisión de lo anterior se puede ver en problemáticas concretas y ejemplos internacionales. En Colombia, por ejemplo, la existencia de una Comisión Nacional de Búsqueda y del Plan Nacional de Búsqueda, lanzado en los primeros meses del 2007, recogen los criterios básicos para centralizar las acciones de búsqueda y desarrollar acciones interinstitucionales. De la misma forma, el Plan es también un protocolo básico a seguir para asegurar la exhumación documentada y científica de los restos de las víctimas. Sin embargo, el Plan se fortalecería agregando mecanismos que regulen la participación de la sociedad civil tanto en la investigación especializada antropológica forense como en la fiscalización de las acciones del Estado. Todo esto sucede mientras sigue vivo el conflicto, los familiares son amenazados, los lugares de entierro están en constante peligro de destrucción y los culpables rondan los caminos.

Un mirada internacional

Un caso concreto a tener en cuenta es el de la búsqueda de las personas desaparecidas en los Balcanes por parte del Tribunal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia. La creación de una Oficina para Personas Desaparecidas de las Naciones Unidas y de una Comisión Nacional para Personas Desaparecidas permitió desarrollar una fórmula viable para asumir las búsquedas luego de que se realizaron exhumaciones masivas, sin investigación preliminar, lo que generó serios problemas en la documentación e identificación de los cadáveres exhumados. En el 2006, la Oficina ganó un premio institucional por la calidad de su trabajo.

Sin embargo, aunque es evidente que los recursos humanos y materiales de esta Oficina son difíciles de asumir por los países con conflictos —por lo general países pobres—, el sentido de dotar al proceso de búsqueda de personas desaparecidas de una visión integral y de un marco humanitario, político y científico facilita la cohesión social alrededor de esa tarea de la sociedad civil.

En Guatemala, la Fundación de Antropología Forense, FAFG, desarrolla la mayoría de las investigaciones antropológicas forenses. Ésta es una organización independiente que realiza funciones periciales para las instituciones nacionales de justicia.

A pesar de las amenazas constantes que ha recibido, la Fundación ha intervenido en más de 700 casos en 10 años, aportando a procesos de investigación fiscal o judicial. Sin embargo, de estos casos no más de uno ha sido juzgado. En Perú, donde hay aproximadamente 13 mil personas desaparecidas, se da un proceso contradictorio. Mientras la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, recomendó la creación de una Oficina para Personas Desaparecidas por el conflicto interno y la conformación de una Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, dichas reco-

El hallazgo de restos de víctimas debe cumplir con los estándares internacionales para garantizar la integridad de la evidencia.



© CORTESIA OFICINA



© Cortesía Simone Branno

Las comunidades han empezado a reunirse para exigir la búsqueda de los familiares desaparecidos. Encontrar sus restos y saber qué pasó ayuda a que finalice su duelo.

recomendaciones, que son parte de los avances internacionales al respecto, aún no han sido implementadas como política oficial del Estado peruano, tanto así que el Ministerio Público —que rechazó públicamente las recomendaciones de la CVR— propone a cambio desarrollar exhumaciones masivas y simultáneas.

En Perú, los avances (las recomendaciones de la CVR) y retrocesos (las exhumaciones masivas y simultáneas) en la búsqueda de desaparecidos demuestran lo que se ha dicho anteriormente: que estos procesos deben ser enmarcados en una perspectiva humanitaria que garantice su cumplimiento más allá de los intereses aislados de las instituciones del Estado o de cualquier otra institución. España presenta un caso sumamente interesante. 70 años después de la Guerra Civil española y la dictadura de Franco, los familiares de las víctimas iniciaron, hace unos años, la búsqueda de sus desaparecidos. A pesar del paso del tiempo, los familiares no han cerrado su ciclo de duelo y aún hoy éste es un tema que se discute con frecuencia en la opinión pública.

Se han realizado exhumaciones de forma continua, que se incrementan día a día. Sin embargo, la dificultad en este proceso ha sido reconstruir la memoria biológica y social de las víctimas, imprescindible para su identificación antropológica forense. Se suma el hecho de que las investigaciones antropológicas forenses se dan fuera del marco de intervención de las instituciones de la justicia española, lo que limita las expectativas de re-dignificar a las víctimas a partir de la validación de estas investigaciones como pruebas en los procesos de judicialización. En cualquier país la búsqueda de las personas desaparecidas requiere, de modo imprescindible, de total transparencia por sus implicaciones para las familias afectadas, quienes necesitan cerrar su ciclo de duelo y recibir reparación, pues la verdad cierra las brechas sociales que estos conflictos generan. Es necesario recalcar el derecho a saber la verdad, impulsado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y por otras organizaciones internacionales y nacionales.

El derecho a saber

La existencia de múltiples comisiones de la verdad, reparación y reconciliación en países afectados por graves violaciones a los derechos humanos demuestra la necesidad de la gente de conocer lo sucedido

para afrontar los conflictos de una manera más civilizada y por un camino que no sea el de la venganza.

En ese sentido, la primera acción reparadora de un Estado es dar credibilidad y cumplimiento a las comisiones de la verdad o de otra índole y a las instancias encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas, a fin de lograr la identificación de la sociedad con las metas de paz y justicia.

Además, los países deberían incentivar las iniciativas regionales y locales para encauzar mejor la búsqueda de los lugares de entierro o la identificación y las cifras de los desaparecidos. Estas iniciativas son también un instrumento para desarrollar políticas adecuadas y de largo plazo que establezcan procesos reales de reconciliación entre los grupos afectados.

La perspectiva humanitaria es el primer eje de intervención con respecto a las personas desaparecidas, pues permite tener un marco de intervención solidario con las víctimas y desarrollar políticas de acción, de investigación y búsqueda a largo plazo, al margen de los vaivenes políticos y sociales de los estados. La recuperación, identificación y restitución de los restos de los desaparecidos son componentes principales de dichas intervenciones humanitarias y de las reparaciones a los individuos, a las familias y a las comunidades afectadas.

“Se seguirán encontrando tumbas y reviviendo los hechos del pasado. La preservación de la memoria biológica y social de las víctimas es una tarea que revela la voluntad de devolverles la identidad a quienes se les ha arrebatado”.

Lo humanitario va más allá de la condición social, política o religiosa del desaparecido pues, en muchos casos, éste era al mismo tiempo víctima y victimario. Sin embargo, esta realidad no niega el derecho a saber qué ocurrió con él, a ser hallado y devuelto a sus seres queridos. El principal derecho humanitario de los familiares y de la sociedad en su conjunto es saber qué pasó, así no sea posible encontrar los cuerpos.

Seguramente se seguirán encontrando tumbas y en cada una, sin duda, se revivirán los hechos del pasado. Por ello, la preservación de la memoria biológica y social de las víctimas es una tarea básica que revela la voluntad, más allá del tiempo presente de devolverles la identidad a quienes les ha sido arrebatada. Cada cuerpo devuelto cierra más de una herida y abre el camino hacia la verdad. ▀

Impacto del sida en contextos de conflicto

Las situaciones de conflicto armado generan condiciones que hacen más vulnerables a actores tanto civiles como armados y que los colocan en alto riesgo de infección por el sida. Éste es un tema que debe ser asumido prioritariamente en las agendas políticas del Gobierno, la sociedad y la comunidad internacional.

Por Ricardo García Bernal y Serena Buccini

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el Sida (Onusida)

El VIH/sida tiene un grave impacto en situaciones de conflicto. Desafortunadamente, en el país no hay conciencia de lo que ello significa. Son numerosos los factores que determinan un aumento de las condiciones de vulnerabilidad a la infección por VIH/sida entre la población civil y los actores armados, legales o ilegales. Entre los grupos de alta vulnerabilidad está la población desplazada (según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento —CODHES—, entre 1985 y 2004 había 3 millones 400 mil colombianos desplazados), cuyo estado de vulnerabilidad es mayor ante el desarraigo, la pérdida de los medios de supervivencia y la separación de las normas socioculturales de los lugares donde habitaban.

Adicionalmente, el desplazamiento forzado se asocia con marginalidad, hacinamiento y exclusión social y limita las posibilidades de desarrollo social y económico, como se evidencia en las limitaciones que sufren para acceder a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva y, por consiguiente, a la prevención, asistencia y tratamiento de sida. Los jóvenes que viven en estos contextos son particularmente vulnerables. El cambio de su entorno cultural, la deserción escolar, el desarraigo social, las presiones familiares para que aporten recursos eco-

nómicos y la escasez de alternativas para sus proyectos de vida generan una baja autoestima y el ejercicio de una sexualidad irresponsable

El impacto en mujeres y niñas

El impacto del conflicto genera consecuencias aun más graves en las mujeres y las niñas. La violencia de género se manifiesta en violaciones, explotación sexual y concepción o aborto forzados, prácticas que son comunes entre los actores armados ilegales. De hecho, su presencia genera a su alrededor áreas de comercio sexual, donde el trabajo sexual representa la única opción viable de sustento para muchas familias. El rompimiento de relaciones estables y la disolución de la cohesión social y familiar facilitan el cambio de reglas de comportamiento y la existencia de relaciones de alto riesgo. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, el impacto del sida aumenta en situaciones de emergencia y, especialmente, en huérfanos, en la población que vive con VIH, en quienes son cabeza de hogar y en integrantes de grupos armados ilegales. La pobreza, el cambio del contexto social y la inseguridad alimentaria incrementan el riesgo de todo tipo de explotación sexual. Un estudio de Unicef (2001) evidenció que de 17 países que tenían más de 100.000 huérfanos por sida, 13 estaban en medio de un conflicto armado o al borde de uno, y 13 eran países pobres altamente endeudados.

Los actores armados presentan factores específicos que los hacen vulnerables a la infección: el alto número de relaciones casuales y la frecuencia en la compra de servicios sexuales por la lejanía de la familia o para aliviar la tensión acumulada. Las desigualdades de género colocan a las mujeres que integran estos grupos ilegales en condiciones de desventaja, situación que les

Los niños, niñas y adolescentes, y especialmente los huérfanos, son más propensos al impacto del sida en situaciones de emergencia.



© Cortesía María Repullo

impide negociar el uso del condón, la planificación y, a veces, decidir tener más o menos relaciones sexuales.

Ante esta problemática, en 2003 el secretario general de las Naciones Unidas presentó un informe en el que afirmó que la epidemia de sida introdujo y estableció una nueva complejidad que requiere repensar y redefinir la tradicional asistencia humanitaria. Para tal fin, el Comité Permanente Inter-organismos (IASC), creado en el marco de la Resolución N° 46/182 de la Asamblea General de Naciones Unidas y que instaba a un fortalecimiento de la coordinación de la ayuda humanitaria, publicó las *Directrices para las intervenciones relacionadas con el sida en contextos de emergencia*. Esta herramienta

ofrece un soporte esencial para trabajar el tema, pues sugiere acciones concretas para llevar a cabo antes, durante y después de las fases de emergencia. Las recomendaciones se refieren a la coordinación, la evaluación y la vigilancia; la protección, la seguridad alimentaria y la nutrición y la comunicación para el cambio de comportamiento, entre otros.

El VIH/sida en Colombia

La tasa de prevalencia de la infección por VIH en la población colombiana se estima en 0,7%, lo cual define la epidemia como "concentrada". Esto quiere decir que no se trata de una epidemia generalizada y que afecta principalmente a grupos específicos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como hombres que tienen sexo con hombres y trabajadoras/es sexuales.

Como se dijo, la población desplazada está en mayor grado de vulnerabilidad. Aunque actualmente se desconocen estudios que indiquen la incidencia exacta de la epidemia en esta población, estimaciones de estudios y proyectos de diferentes entidades indican que hay una tasa de prevalencia superior a la media nacional.

En prevención de Sida hay esfuerzos que el país ya está adelantando, como el Proyecto Colombia, financiado por el Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, y dirigido a jóvenes y adolescentes residentes en comunidades receptoras de población desplazada. Los beneficiarios son cerca de 600 mil jóvenes que residen en 48 municipios.

Varias son las lecciones aprendidas: los mensajes de prevención y promoción de la salud son eficaces en la medida en que ofrezcan herramientas útiles para construir y/o reconstruir tejidos sociales y proyectos de vida. En este marco, han dado resultados muy positivos las actividades recreativas, artísticas y económicas promovidas para fomentar la realización de emprendimientos juveniles. Actualmente se están implementando alrededor de 221 iniciativas que involucran a 1.539 jóvenes de 33 municipios. La otra cara de la moneda demuestra que todavía hay resistencia a trabajar el tema en los contextos de conflicto.



La presencia de actores armados genera a su alrededor zonas de comercio sexual donde es más fácil la propagación del VIH/ Sida.

Recientemente se han movilizado recursos adicionales para atender esta situación. Por ejemplo, durante este año se están ejecutando proyectos interagenciales (de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, ACNUR, PMA y ONUSIDA) enfocados hacia poblaciones en contextos de desplazamiento. Dichos proyectos prevén actividades de educación y prevención del sida. Muchas veces los programas y proyectos no abarcan este componente debido a que la presencia de actores armados ilegales genera problemas de seguridad.

Los dos últimos informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia (publicados en 2006 y 2007) evidencian casos de violaciones de derechos humanos o amenazas en contra de personas que viven con el virus, homosexuales, transexuales y quienes trabajan con estos grupos poblacionales.

“ Los mensajes de prevención y promoción de la salud son eficaces si ofrecen herramientas útiles para construir y/o reconstruir tejidos sociales y proyectos de vida”.

Debido a que la tasa de prevalencia en población general no es tan alta, como en los países africanos donde el impacto de la epidemia es más que evidente, se tiende a invisibilizar el tema y a no darle la prioridad e importancia que amerita.

Con base en proyecciones que comparan países diferentes, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA-Colombia) es partidario de intensificar las intervenciones preventivas para evitar que la situación llegue a niveles alarmantes y eventualmente catastróficos, lo que implicaría concentrarse en acciones de asistencia y tratamiento.

Ante la situación del sida en el país y específicamente en el conflicto armado, se espera que entidades nacionales e internacionales trabajen dicha situación en sus programas y proyectos y, especialmente, que el tema sea asumido como prioritario dentro de la agenda política del Gobierno. ■

Amanece en El Salado

(Viene de la página 20)



Las familias han comenzado la vida de nuevo en El Salado. En sus hijos guardan la esperanza del renacer.

© Cortesía Colectivo de Comunicaciones Línea 21

ver a la tierra de uno, donde hay lo que uno está acostumbrado a tener.

Las mujeres también podemos

Fue entonces cuando vinieron unas señoras de ACNUR y de la ONG Mujer y Futuro. Nos dijeron que podíamos organizarnos y tratar de hacer cosas por nosotras mismas. Nosotros queremos eso ahora: trabajar y vivir de lo que nosotras hacemos y que nos respeten, porque como no estábamos unidas siempre fuimos menos importantes.

Lo primero fue organizarnos como grupo, con estatutos y todo. Entonces en 2003 conformamos "Mujeres Unidas de El Salado", nuestra organización. Y empezamos a capacitarnos. Antes, ellas venían al corregimiento a darnos las charlas, pero la cosa se puso difícil y después nos tocaba bajar a nosotras al pueblo. Así pasaron varios meses pero nosotras no desistimos. Si nos capacitábamos, íbamos a saber cómo trabajar para sobrevivir sin depender de nadie. Hoy ya somos 140 familias las que hemos retornado, y las mujeres estamos or-

sotras nos dedicábamos a las labores de la casa, a atender a los niños, a cocinar. Los maridos se iban para los cultivos y cuando era necesario se iban todos a limpiar un terreno vecino o a sembrar.

Pero entonces nos tocó salir a todos porque la gente avisó que ya venían los señores, los mochacabezas, y las familias empezaron a salir. Eso fue el 16 de febrero de 2000 y el 18 se metieron. Esa fue la última masacre, en la que asesinaron a 58 personas.

Como pudimos, después de tres días salimos. Nos arrimamos en casas de conocidos en Mandela, un barrio de Cartagena. Empezaron a mirarnos como si nosotros trajéramos plaga. No quedaba de otra: o nos uníamos como mujeres y buscábamos cómo salir de esa situación o terminábamos peor que antes. Uno de mujer saca esa fuerza para

“Uno aprende que las cosas no son de la noche a la mañana, así nosotros hayamos perdido todo en una sola noche”.

luchar por los hijos. Y así fue que empezamos a solidarizarnos con las que estaban igual que nosotras. En la ciudad, uno no es nadie y nadie sabe de nosotros.

Aguantamos hasta donde pudimos, pero la dignidad lo trae a uno de vuelta. Y eso fue lo que hicimos. Regresar. Cuando hicimos el primer acercamiento, en 2003, todo estaba enmontado. Vinieron 20 hombres y tres mujeres a limpiar y a quemar rastrojo. Entre ellos, María Cabrera, una mujer solidaria, que ayudaba a todo el mundo. Ella era como la luz de nosotros, hasta que la mataron. Casi nos devolvemos otra vez.

Nos metimos en las casas que no estaban tan mal. El que iba retornando se ubicaba en la casa que iba quedando limpia. La gente llegaba con una mano adelante y una atrás. Entre todos nos pusimos a ayudar en lo que podíamos porque es una alegría muy grande vol-

ganizadas para solucionar nuestros problemas: vamos poquito a poco. Algún día seremos 50 mujeres y después más.

Hemos aprendido cuáles son nuestros derechos y ya la gente nos ve con respeto. Es que las mujeres no estamos sólo para cocinar y atender al marido. Tenemos un papel más importante que es ayudar a la comunidad y tener nuestras propias cosas ganadas con nuestro trabajo. Los esposos ya han empezado a entender y nos están aprendiendo a respetar. Ya estamos en la Junta Directiva de la Asociación de Desplazados de Bolívar, Asodesbol. Nosotras nunca pensamos que una mujer pudiera llegar allá.

Uno también aprende que las cosas no se logran de la noche a la mañana, así nosotros hayamos perdido todo en una sola noche. Es que construir es más difícil que tumbar. Mis hijas ya están trabajando con los niños por la niñez de El Salado. Son muchos los jóvenes que piensan que no vale la pena estudiar ni hacer nada porque cualquier día otra vez toca salir, pero estamos tratando de empezar de nuevo y hay que pensar en los que vienen atrás.

Hoy tenemos cultivos, ganado, nos hemos capacitado y sabemos que tenemos nuestros derechos, que no es como antes y que estamos organizadas como mujeres para trabajar por la comunidad. Tenemos también signos de bienaventuranza, como el nacimiento de mi hija Lady Laura durante el retorno. Algún día ella será la que ayude a cambiar esta situación.

Yo sé que antes del amanecer es más oscuro, pero ya creo que la noche fue muy larga para nosotros, "los salaeros": ya debe empezar a amanecer. Con la organización de mujeres tenemos la esperanza de estar cada vez más unidas, que todas en El Salado nos juntemos y sigamos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y mejor; que mañana sepan de nosotras y nos den la mano para seguir juntos y sacar adelante este pueblo saladero. ▀

La hora del poder local

En 28 días se celebrarán las elecciones locales y serán elegidos 32 gobernadores, 398 diputados, 1.098 alcaldes, 12.243 concejales y las Juntas Administradoras Locales. Este evento ha implicado un ejercicio de gran responsabilidad ciudadana y política de electores y candidatos en su tarea de contribuir a que estas elecciones aporten al fortalecimiento de la democracia, y es una oportunidad para hacer valer los derechos políticos y civiles de los colombianos. En medio de preocupaciones de la ciudadanía por las denuncias sobre diferentes formas de posibles fraudes, las instituciones del Estado, el Gobierno y la sociedad civil han hecho esfuerzos para que haya transparencia en las elecciones.

Varios partidos políticos han asumido su responsabilidad firmando pactos de transparencia que han surgido por iniciativas del Gobierno y de la Misión de Observación Electoral. Es un gran paso, que será definitivo en el momento en que los pactos sean cumplidos. Así mismo, es de vital importancia que los candidatos debatan sobre los desafíos de sus comunidades.

La construcción de la paz, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, y la gobernabilidad democrática son temas que deben hacer parte de sus agendas y, si son elegidos, de sus políticas públicas y planes de desarrollo. Éstos, a su vez, tienen que estar acompañados de indicadores que permitan medir avances en temas como los ODM.

Resulta crucial que los aspirantes a los cargos regionales de elección popular se pronuncien frente a estos temas, como lo han hecho en debates organizados por la Alianza Votebien en la que participan *Semana*, Terra, Caracol Radio, Colprensa, Fescol, Transparencia internacional, grz, Congreso Visible, Embajada Británica y PNUD. En estos debates, candidatos a gobernadores del Huila, Meta, Caldas y Norte de Santander, y aspirantes a las alcaldías de Barranquilla y San José del Guaviare les han contando a sus electores cómo responder a los niveles de pobreza, cuáles son sus compromisos con las comunidades indígenas o afrocolombianas y cómo garantizarán que los recursos de las administraciones beneficien a los menos favorecidos. Otros debates se tienen previstos con aspirantes a las alcaldías de Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá y a la Gobernación de Sucre con el objetivo de asumir compromisos por la transparencia, el desarrollo humano y el fortalecimiento de las instituciones políticas y la democracia, y a su vez, para que el ciudadano esté bien informado.

Ya hay experiencias que vale la pena tener en cuenta, como la de Valle del Cauca donde los candidatos a alcaldías y a la gobernación firmaron un acuerdo de compromiso para que los ganadores incluyan en sus agendas soluciones a la exclusión social, o el Acuerdo de Voluntades firmado por los candidatos a la Alcaldía de Soacha (Cundinamarca) y la Mesa Humanitaria y Social de este municipio, integrada por organizaciones de la sociedad civil y apoyada por 13 agencias del Sistema de Naciones Unidas. Iguales compromisos deberán asumir los candidatos ganadores para dar continuidad a aquellas políticas, programas y proyectos de las administraciones anteriores que han sido rentables socialmente, que han servido como vehículo para la inclusión, para el desarrollo humano y que han sido ejemplo de rigor fiscal y de compromiso en la búsqueda de la paz y la reconciliación.

Como se afirmó en el pasado Especial de esta revista sobre elecciones, el PNUD respalda los esfuerzos e iniciativas que desde diferentes ámbitos se están adelantando ante unas elecciones que están en la mira de todos los colombianos y son un reto para la democracia, democracia entendida como un medio necesario e indispensable para el desarrollo y que permita la reconstrucción de tejidos sociales e institucionales de un país que se ha conocido más por la confrontación que por la solidaridad y el compromiso ciudadano.

El 28 de octubre el votante tiene la decisión en sus manos. De él y ella dependerán quiénes sean electos para asumir los destinos de los departamentos y municipios. Pero a su vez, trae responsabilidades para los poderes territoriales en cuanto al cumplimiento de acciones concretas frente a los ODM, la paz y la gobernabilidad. Las elecciones también son un momento fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Este ejercicio electoral requiere de la participación activa de todos los sectores de la sociedad que, sin excepción, tienen también una importante cuota de responsabilidad. ■



PNUD - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO
AÑO 3, OCTUBRE DE 2007
ISSN 1794-9408

BRUNO MORO
Representante Residente, Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD

ALESSANDRO PRETI
Coordinador del Área de Desarrollo,
Paz y Reconciliación

PNUD

DIRECCIÓN Y EDICIÓN
Olga González Reyes

INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN
Astrid Elena Villegas
Julia Paola García Zamora

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

Simone Bruno • Marta Repullo • Oficina del Alto
Comisionado para la Paz • Danilo Villafañe •
Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Dirección de Prevención de Crisis y Recuperación
(BCPR, POR SU SIGLA EN INGLÉS)
del PNUD con sede en Nueva York.

DISEÑO GRÁFICO
Editorial El Malpensante S. A.

IMPRESIÓN
Panamericana Formas e Impresos S. A.

BOLETÍN HECHOS DEL CALLEJÓN
Carrera 11 N° 82-76, Oficina 802,
Bogotá, Colombia

Teléfono: 6364750 extensión 205-208-202
Fax: 6364750 extensión 209

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
olga.gonzalez@undp.org

VISITE NUESTRA PÁGINA DE INTERNET:
www.pnud.org.co/indh2003

LAS OPINIONES Y PLANTEAMIENTOS EXPRESADOS
NO REFLEJAN NECESARIAMENTE LAS OPINIONES
DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO, SU JUNTA DIRECTIVA,
NI LOS ESTADOS MIEMBROS

Amanece en El Salado

Después de varios años de desplazamiento, las mujeres de El Salado, en Montes de María, regresaron a su tierra, restauraron algunas casas, se organizaron y se capacitaron. Hoy 140 familias han retornado. Tienen cultivos, ganado y, de nuevo, un lugar en el que tras una larga noche construyen el amanecer.

Por Colectivo de Comunicaciones Montes de María — Línea 21



© Cortesía Colectivo de Comunicaciones Línea 21

Las mujeres organizadas de El Salado llevan a sus espaldas tristes noches de miedo, el afán de huir de la muerte, la necesidad de salvar la vida de sus hijos y la fatiga prolongada de correr detrás de una vida que no se resigna a continuar su hambre y su dolor.

Para ellas, la lucha por la supervivencia luego de dos desplazamientos, producto de sendas masacres perpetradas por paramilitares en 1997 y 2000, es la expresión de un camino que se anima desde la cotidianidad, gracias al tesón y a la dignidad con que han enfrentado su vida ante la histórica discriminación y exclusión.

Son 23 mujeres que decidieron empezar de nuevo, alimentando su deseo de lograr por primera vez una vida tranquila en su propio territorio y habitando su casa sin miedo y con dignidad. Es un capítulo de la historia de nuestro país que las Mujeres Unidas del corregimiento más grande de El Carmen de Bolívar, en Montes de María, quieren escribir luego de su retorno, ocurrido en 2003, después de abandonarlo todo, en el 2000. A continuación el testimonio de Mariluz, una de las 23 mujeres que retornaron a El Salado:

Yo crecí en el campo. La vida mía era recoger lo que se sembraba. Todo era abundante pues el tabaco daba trabajo para hombres y mujeres, pero se fue acabando. Las mujeres dejamos de ensartar tabaco, y sembrar ya da pérdida. Nos tocó volver al pancoger, que no alcanza para sacar a la venta.

Aunque a las mujeres nunca nos ha ido bien del todo, siempre trabajando pero dependiendo del marido, antes era mejor. No había esa gente que empezó a meterse en las casas y a preguntar por los otros. Aquí éramos más unidos, había más confianza, pero ya uno no sabe con quién está hablando... Es que mataban a todo el mundo porque sí y porque no. Unos se llenaban de miedo y no decían nada. A ellos también los mataban. Y uno en lugar de correr pa'l pueblo, tiraba pa'l monte a aguantar esa mosquitera con todo y pelaos. Uno no quisiera irse pero...

Así empezamos el retorno

Aquí teníamos de todo. La yuca, el ñame, el cilantrillo, las gallinas, el pavo y los puercos, hasta queso sacábamos. No-

Con símbolos, recuerdan a sus seres queridos y representan su amor por la vida y por su pueblo salaero.

(Pasa a la página 18)